

Santiago, seis de abril de dos mil veintidós.

Vistos:

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, por sentencia de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en los antecedentes RUC 1.900.525.792-4, RIT 106-2021, condenó a Zunilda Amada Jara Lazcano y a Eugenia de las Marías González Astete, a la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y multa a beneficio fiscal de cuarenta unidades tributarias mensuales, como coautoras del delito consumado de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, cometido el día 29 de agosto de 2019, en la comuna de Rancagua.

En contra de dicho fallo, la defensa de las sentenciadas dedujo recurso de nulidad, el que se conoció en la audiencia pública de catorce de marzo pasado, convocándose a los intervinientes a la lectura de la sentencia para el día de hoy, como consta del acta respectiva.

Considerando:

Primero: Que, el recurso de nulidad se cimenta, de manera principal, en la causal contemplada en el artículo 373, letra a) del Código Procesal Penal. Se denuncia que, desde el inicio de la investigación, existió una irregularidad, reconocida tanto por los propios funcionarios policiales, como por el ente persecutor y el tribunal, cual fue que, la solicitud del órgano de persecución en cuanto a medidas intrusivas —al comienzo de la investigación— se fundó en el informe policial N° 226 del OS-7 de Carabineros de Chile, de 20 de agosto del año 2019, incorporado a la carpeta investigativa, existiendo a su respecto dos informes



diversos en su contenido, pero que poseen el mismo número e igual fecha de emisión.

Dicha divergencia comprendía, por un lado, a uno de los blancos investigativos en este proceso, el que sí se menciona en un documento pero en el otro se omite y, por otra parte, la sindicación de un domicilio en el cual se habrían verificado conductas de tráfico de drogas, el cual, en el otro documento no aparece mencionado; el primigenio, consta de 13 páginas y sirvió de base para la obtención de la orden de entrada y registro a los domicilios de las imputadas; en tanto que, la segunda versión, de 9 páginas, no incluye un domicilio ni el nombre del blanco investigativo.

En concepto de la recurrente y, a pesar de su trascendencia, se menguó su relevancia, descartando de manera errada, en su concepto, la contravención a normas imperativas del compendio del ramo y vulnerando la garantía al debido proceso, en su directriz de un procedimiento racional y justo que había sido denunciado incluso con antelación en sede del Juzgado de Garantía.

Pide invalidar la sentencia y el juicio oral que le antecedió, disponiendo la realización de un nuevo juicio oral, ante tribunal no inhabilitado.

Segundo: Que, de manera subsidiaria, la defensa de las sentenciadas funda su arbitrio en el motivo absoluto de nulidad, contemplado en el artículo 374, letra e) del Código Procesal Penal, en relación a los artículos 297 y 342 letra c) del código adjetivo.

Expone que, de la mera lectura del fallo recurrido y su análisis, es posible observar que, la sentencia de marras incurre en contradicciones vitales que se condicen con una falta de fundamentación, situación que se devela especialmente en lo decidido en el basamento trigésimo que apacigua de manera paradójal los



efectos en la génesis de la prueba incriminatoria que se describe y utiliza para dar por ocurrenente el injusto en cuestión y la participación de las encartadas.

Refiere que, el tribunal utilizó como sustento esencial del reproche punitivo que efectúa en relación a las acusadas, los dichos de los agentes policiales que participaron en los allanamientos y detención, conjuntamente con el hallazgo de la droga y otras especies, todas actuaciones que se ejecutaron en base al informe N° 226 del OS-7 de agosto del año 2019, en el cual éstas no aparecían directamente como blancos de la pesquisa, obteniéndose las órdenes que se concretaron a su respecto, en base a antecedentes no fidedignos, tales como, la precisión de otros objetivos y moradas de acopios, los que conforme se ha destacado, luego desaparecieron en el mismo informe.

Afirma que las deducciones negativas y positivas paralelas que coligen los juzgadores resultaron contradictorias, debiendo predominar un hecho carente de controversias como lo fue la enmienda del informe en comento, que como se consignó no tuvo justificantes, a pesar de lo cual de manera contraproducente y contraviniendo imperativos prevenidos en el compendio del ramo, se valoraron todos los indicios que de tal mutación injustificada derivaron, obtenidas con infracción de garantías fundamentales que afectan ostensiblemente la fidelidad de la prueba, configurando a todas luces una duda razonable en el juzgamiento y que forzosamente implica que en el caso sub lite el dictamen sobrevenga como infundado y conculcador de las reglas de valoración que han sido enunciadas con antelación.

Pide invalidar la sentencia y el juicio oral que le antecedió, disponiendo la realización de un nuevo juicio oral, ante tribunal no inhabilitado.

Tercero: Que, en relación con las recurrentes, la sentencia impugnada, en su motivo vigesimoséptimo, tuvo por acreditado que, “...después de una larga



investigación realizada por funcionarios de la sección OS7 de Rancagua, durante las cuales haciendo uso de la técnica del agente revelador se logró la venta de papelillos contenedores de pasta base de cocaína, en dos ocasiones diferentes, los días 7 y 8 de agosto de 2019, de parte de las imputadas Eugenia de las Marías González Astete, Fresia del Carmen Sepúlveda González y Carina Ignacia Sepúlveda González, en sus respectivos domicilios; el día 29 de agosto de 2019, aproximadamente a las 06:00 horas, y previa autorización judicial para la entrada y registro, se procedió al allanamiento de seis domicilios ubicados en el pasaje Los Pronos, de la población Algarrobo 3, de la ciudad de Rancagua.

Así, las justiciables Eugenia de las Marías González Astete y Zunilda Amada Jara Lazcano, fueron sorprendidas poseyendo y guardando, respectivamente, un total de dos kilos de pasta base de cocaína, al interior de una caja fuerte guardada en el dormitorio de Jara Lazcano, en su morada ubicada en el departamento 108 del bloc # 1.216, mismo en el cual se descubrió también la existencia de un revólver calibre .38 corto, apto para el disparo, guardado al interior de la misma caja fuerte, la suma de \$1.400.000 en dinero efectivo de diversa denominación, que estaba al interior de una caja guardada en una bodega al interior de dicho departamento, y cinco (5) teléfonos móviles. La llave que permitió la apertura de dicha caja fuerte estaba en poder de doña Eugenia González Astete.

En el allanamiento del departamento 102 del bloc # 1.216, que corresponde al domicilio de Eugenia de las Marías González Astete, no se encontró drogas, pero sí la suma de \$105.000 en dinero efectivo de diversa denominación, un teléfono celular y una llave cónica. Esta última resultó ser aquella que abría la caja fuerte encontrada en el departamento 108 del mismo bloc, domicilio de Zunilda Jara Lazcano.



Durante el registro de su departamento 102, la imputada González Astete permitió voluntariamente el ingreso de los policías al departamento 203, del bloc # 1.212, de propiedad del cónyuge de ésta, el cual estaba preso en la cárcel de Rancagua, lugar en el cual se encontró 9 gramos bruto y 7,6 gramos bruto de pasta base de cocaína, encontrados en: 1.- 20 envoltorios de papel blanco cuadriculado, contenedores de sustancia color beige, de cocaína base. 2.- 01 bolsa de nylon transparente, contenedora de una sustancia de color beige, de cocaína base; y, 67,2 gramos brutos, encontrados en 01 bolsa de nylon transparente, contenedora de una sustancia de origen vegetal, color verde, que resultó ser marihuana elaborada...”

Estos hechos, respecto de las acusadas, fueron calificados por el tribunal como constitutivos del delito consumado de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, previsto y sancionado en los artículos 1 y 3, ambos de la Ley 20.000.

Ahora, en relación a los puntos abordados en las causales del recurso de nulidad, el fallo señaló en su motivo trigésimo que, “...de la lectura de lo excluido en el oficio 226, y de las explicaciones dadas por los dos agentes policíacos, se desprende que las razones de la exclusión son entendibles, no se justifica que se modifique el oficio en cuestión, debió prepararse otro con distinta denominación, pero en nada lo excluido es sustancial para alterar en algo la investigación respecto de las acusadas de autos, La omisión de estos antecedentes, no afecta la credibilidad de los citados testigos, ni la de los otros funcionarios de carabineros que intervino en los allanamientos, razón por la cual la solicitud de hacer ‘valoración negativa’ de la prueba de cargo ha sido desestimada.

Corolario de lo anterior, hay que tener presente que sobre la llamada ‘valoración negativa’ de la prueba en el proceso penal no es un concepto que



aparezca en nuestra legislación procesal penal, sino que es tan sólo una creación jurisprudencial, y puede ser definida como “la actividad del juez de fondo dirigida a no considerar como medios de prueba susceptibles de fundar convicción en el tribunal, aquellos rendidos en el juicio oral y cuyo origen se vincula a una infracción de garantías fundamentales del imputado, cometida por los órganos de persecución criminal. Dicha valoración negativa queda plasmada en la sentencia definitiva y debe necesariamente ser fundamentada, caso a caso” (CORREA ROBLES, Carlos, ‘La llamada valoración negativa de la prueba en la doctrina y la jurisprudencia’, en LATIN AMERICAN LEGAL STUDIES, Vol. 8, 2021, p. 68). A este respecto, destacan diversas resoluciones de las Cortes de Apelaciones del país descartándola, por ser una forma de exclusión de prueba, la cual está vedada como facultad a los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Así, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en sentencia de 6 de agosto de 2019, rechazó que el tribunal de fondo pueda valorar negativamente la prueba cuestionada rendida, previamente admitida en el auto de apertura, en el caso denominado ‘armas de San Antonio’.

En la misma posición, la Corte de Apelaciones de La Serena, causa rol 319-2012; igualmente, la Corte de Apelaciones de Santiago, el año 2017, en autos caratulados Ministerio Público con E.E.B, considera que la valoración negativa constituye un ‘fraude de etiquetas’ que permite ocultar la exclusión de prueba.

Por su parte, en la doctrina nacional, Julián López sostiene que el Tribunal de Juicio Oral debe valorar toda la prueba rendida en juicio en cuanto a su mérito para formar convicción, sin excepción (HORVITZ y LÓPEZ, Derecho Procesal Penal, 2004, pp. 200 y ss.). En la misma posición, Jorge Cortés-Monroy, quien sostiene que el artículo 297 del código procesal penal es claro y no admite discusión el tribunal de juicio oral debe valorar y considerar en su sentencia toda



la prueba reproducida en el juicio (CORTÉS-MONROY, Jorge (2018). 'La valoración negativa' como exclusión de la prueba ilícita en el juicio oral", Revista Ius et Praxis, Vol. 24, N° 1, pp. 661-692).

Por todas estas razones, pero principalmente porque no existen motivos para dudar de la credibilidad de los funcionarios de carabineros que atestiguaron en juicio, es que se rechaza la solicitud de valoración negativa de la prueba de cargo, la que por lo demás –como se dijo en los considerandos anteriores– es coincidente con la declaración de las sentenciadas de autos”.

Cuarto: Que, en relación a la causal de nulidad opuesta de forma principal por la defensa de las acusadas, al respecto, esta Corte ya ha señalado (entre otras, en SCS N° 31.208-2021, de 16 de agosto de 2021) que: *“Es un derecho asegurado por la Constitución Política de la República el que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, y el artículo 19, N° 3°, inciso sexto de la Carta Fundamental, confiere al legislador la misión de definir siempre las garantías de un procedimiento racional y justo. En torno a los tópicos que contempla el derecho al debido proceso, este tribunal ha sostenido que a lo menos lo constituye un conjunto de garantías que la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile y las leyes entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley, que se dicten veredictos motivados o fundados, etcétera. Así, entonces, no hay discrepancias en aceptar que sin duda el derecho al debido proceso está integrado por la obligación de respetar los procedimientos fijados en la ley, desde que en todo proceso penal aparece comprometido el interés público de la comunidad en el*



esclarecimiento de los sucesos y el castigo de los delitos, como también la absolución del inocente de acuerdo a una serie de actos de carácter formal y preestablecidos, que den garantías del respeto de la presunción de inocencia, la independencia del tribunal, la igualdad entre las partes y la protección de los intereses del afectado. Este interés debe ser tutelado por el Ministerio Público como órgano predispuesto por el Estado precisamente con ese propósito, que incluye por cierto la promoción de la acción penal y la carga de probar la culpabilidad del inculcado, al mismo tiempo que el tribunal debe actuar con neutralidad y objetividad, de manera que no abandone su posición equidistante de las partes y desinteresada respecto del objeto de la causa”.

Quinto: Que, por otra parte, los elementos del debido proceso también han sido desarrollados mediante la incorporación al procedimiento de una serie de resguardos tendientes a garantizar que el imputado goce, desde el momento en que se le atribuya participación en un hecho punible, de una serie de derechos que garanticen el respeto de la presunción de inocencia que lo ampara y la igualdad de armas, entre los cuales se encuentra el ser oído, que supone el derecho a conocer el contenido de los cargos que se le imputan y los antecedentes que los fundan para ejercer adecuadamente su derecho a defenderse de todos los hechos y circunstancias que se le imputan y formular los planteamientos y alegaciones que convengan a su defensa, el derecho a controlar y controvertir la prueba de cargo, a probar los hechos que él invoca, y la prohibición de ser sancionado por presupuestos diversos de los contenidos en la formalización y en la acusación.

Sexto: Que, sin embargo, esta Corte también ha resuelto uniformemente que el agravio a la garantía del debido proceso debe ser real, en cuanto perjudique efectivamente los derechos procesales de la parte, esto es, que



entrase, limite o elimine su derecho constitucional al debido proceso. Asimismo, se ha dicho que la infracción producida a los intereses del interviniente debe ser sustancial, trascendente, de gravedad, de tal modo que el defecto sea, en definitiva, insalvable frente al derecho constitucional del debido proceso, por cuanto la nulidad que se pretende, en tanto constituye una sanción legal, supone un acto viciado y una desviación de las formas de trascendencia sobre las garantías esenciales de una parte en el juicio, en términos que se atente contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento (entre otras, SCS N°s 79969-2021, de 23 de febrero de 2022; 39.853-2021, 28 de febrero de 2022; 39634-2021, de 11 de marzo de 2022).

Séptimo: Que, el fundamento del articulista para sustentar la causal principal hecha valer no se relaciona con algún medio de prueba que se haya obtenido con inobservancia de garantías fundamentales. El reproche planteado guarda relación con la existencia de omisiones en uno de los elementos de investigación policial que permitió obtener la autorización para una medida intrusiva, durante la cual se verificó el hallazgo de las sustancias ilícitas en poder de las acusadas y, respecto de las cuales, se determinó su responsabilidad a título de autoría en el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. En el mismo orden de ideas, los reparos por parte del recurrente en modo alguno se relacionan con alguna falsedad o con elementos inexistentes, sino que solo enuncia ciertas omisiones en una segunda versión de un mismo informe, el que, huelga recordar, no ha sido incorporado ni se ha ofrecido por el ente persecutor como evidencia de cargo en su libelo acusatorio, omisiones que fueron justificadas fehacientemente conforme analizan los sentenciadores del grado en la motivación trigésima del fallo en revisión.



Octavo: Que, en atención a lo expresado en la motivación precedente, cabe entender que la actuación policial y la del órgano persecutor se ajustaron a derecho, toda vez que los antecedentes que sirvieron de sustento a la medida intrusiva que culminó con el hallazgo de la evidencia incriminatoria y la detención de las acusadas se fundó en antecedentes reales, descartando la existencia de un vicio de ilegalidad a su respecto, máxime si el reproche no se relaciona directamente con algún medio probatorio incorporado durante la audiencia del juicio oral. Cabe recordar que es el propio legislador procesal penal el que ha proscrito la posibilidad que un informe o un registro policial pueda reemplazar las declaraciones de la policía en el juicio oral.

Noveno: Que, aun en el evento de poder efectuar algún reproche a la forma en que fue corregido el informe policial en comento, no logra configurarse el vicio propuesto, en primer lugar porque no formó parte de la evidencia incorporada en el juicio oral y, en segundo lugar, toda vez que carece de trascendencia por cuanto, para poder desacreditar los testimonios de los funcionarios policiales que fueron presentados a estrado, la defensa contaba con todos los medios que franquea el ordenamiento para desacreditar sus asertos, de forma tal que pudo ejercer los derechos de la defensa a plenitud. Siendo requisito indispensable para la procedencia de la nulidad, la existencia de infracción de carácter sustancial, por lo que su falta torna innecesario mayor análisis.

Décimo: Que, en lo que guarda relación con motivo absoluto de nulidad propuesto a título subsidiario, esta Corte ya ha sostenido que toda sentencia en materia criminal debe razonar y exponer los fundamentos en que se apoya, justificar la decisión adoptada, fijar los hechos y establecer el derecho aplicable. El cumplimiento de la obligación de motivación de la decisión significa elaborar una justificación específica de la opción consistente en tener algunos hechos como



probados, sobre la base de los elementos de prueba obtenidos en la litis, con las garantías inherentes al juicio oral. Tal deber apunta no sólo a permitir la comprensión de la decisión, sino además a garantizar la actuación racional en el terreno de la determinación de las premisas fácticas del fallo.

La satisfacción de esta carga posibilita la fiscalización de la actividad jurisdiccional por los tribunales superiores mediante el ejercicio de los recursos procesales. Si el tribunal explica las razones de su resolución es posible controlar si efectivamente la actividad judicial se ha desarrollado dentro de los parámetros de la lógica-racional y la legalidad o si, por el contrario, es el resultado de la arbitrariedad. Por ello, en nuestro ordenamiento jurídico las decisiones judiciales no deben resultar de meros actos de voluntad o ser fruto de simples impresiones de los jueces, sino que deben ser el corolario de la estimación racional de las probanzas, exteriorizada como una explicación igualmente racional sobre la justificación de la decisión de una determinada manera –y no de otra–, explicación que deberá ser comprensible por cualquier tercero, mediante el uso de la razón.

Undécimo: Que, al mismo tiempo, la fijación de los hechos y circunstancias que se tuvieren por probadas, favorables o desfavorables al acusado, debe ir precedida de la debida valoración que impone el artículo 297 ya citado. Atendiendo a esta norma, el tribunal debe hacerse cargo de toda la prueba producida, incluso la desestimada, con señalamiento de los medios de prueba, único o plural, por los cuales se dieren por probados los hechos y circunstancias atinentes a la litis.

Duodécimo: Que tal exigencia de fundamentación ha sido debidamente satisfecha por la sentencia que se revisa. En efecto, el fallo extrae conclusiones del análisis de la prueba, como resultado de un proceso valorativo de cada uno de los elementos de convicción rendidos, tanto respecto de los hechos objetivos



integrantes de los tipos penales atribuidos como de las conductas desplegadas por los acusados.

A diferencia de lo denunciado en el recurso, el tribunal sí se hace cargo de analizar toda la prueba rendida en el juicio, desechando los argumentos de la defensa para valorar negativamente la prueba testimonial. El propio fallo razona sobre un reparo en la forma de la confección del segundo informe policial, pero descarta que permita alterar la investigación respecto de las acusadas, ni tampoco afecta la credibilidad del relato de los testigos que depusieron en estrado, ni de los funcionarios policiales que participaron en la entrada y registro en el domicilio de las acusadas.

En tales términos, al no haberse demostrado vicio alguno en el deber de fundamentación de la sentencia respecto a los rubros examinados, la impugnación fundada en ese motivo no puede ser admitida.

Decimotercero: Que, por el contrario, del tenor del recurso se desprende que lo que se intenta impugnar es la valoración que hizo el tribunal y en base a la cual fijó los hechos conforme a los cuales calificó la participación de las acusadas, así como las razones que llevaron a desestimar las propuestas de la defensa. De esta forma, lo que destaca del libelo son ciertas circunstancias que considera insuficiencias que surgirían de un análisis individual de las probanzas; pero esas protestas sobre la apreciación son más propias de un recurso de apelación y carecen de la eficacia legal requerida para configurar una causal de nulidad como la intentada.

Se debe recordar que en este recurso no ha sido dada a esta Corte la facultad de realizar una nueva ponderación de los elementos de prueba vertidos en el juicio oral, puesto que ello atenta contra el principio de inmediación y supera los límites de la nulidad. Por el contrario, las argumentaciones del impugnante se



dirigen en este sentido, a cuestionar la prueba producida por el Ministerio Público, mediante el análisis parcial de ella, sin atacar —como supone la causal de nulidad en examen— el razonamiento del fallo que plasma el análisis global de la prueba rendida, en cuanto éste debe ajustarse a las reglas de la sana crítica, respetando las máximas de la experiencia, los principios de la lógica y los conocimientos científicamente afianzados.

Por ello, la circunstancia de no compartir el recurrente las conclusiones del tribunal en cuanto a la valoración de la prueba producida, no supone la idoneidad de impugnación por esta vía, en donde se ha denunciado que contradicen los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, extremo que no concurre pues quedó demostrado que las pruebas fueron consideradas y valoradas, sin contradecir estos parámetros, lo que permite la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegó el veredicto e impide configurar el vicio denunciado, como constitutivo de invalidación absoluta, que contempla el artículo 374, letra e) del Código Procesal Penal, de manera que, el recurso propuesto por esta causal será rechazado.

Por consiguiente, a diferencia de lo denunciado en el recurso, la sentencia sí analiza íntegramente todos los elementos objetivos y subjetivos del delito de robo con intimidación, estimándolos concurrentes, razón por la que el vicio alegado también será desestimado.

Por estas consideraciones y de acuerdo también a lo establecido en los artículos 372, 373 letra a), 374 letra e), 376 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad promovido por la defensa de las sentenciadas Zunilda Amada Jara Lazcano y Eugenia de las Marías González Astete, en contra de la sentencia de cuatro de octubre de dos mil veintiuno y en contra el juicio oral



que le antecedió en el proceso RUC N° 1.900.525.792-4, RIT N° 106-2021, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, los que en consecuencia, **no son nulos**.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Valderrama.

Regístrese y devuélvase.

N° 81.156-2021.



QHXYVBXXF

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, seis de abril de dos mil veintidós.

En Santiago, a seis de abril de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

